

Relación que se cita de los documentos de Aduanas que deben sujetarse á reintegro.

Reintegro de 25 céntimos de peso.

- 1º Copia del manifiesto que deben presentar los Capitanes
- 2º Licencias generales de Alijo
- 3º Solicitudes de embarque de géneros para la exportación ó cabotaje
- 4º Idem pidiendo la salida de buques
- 5º Idem pidiendo permiso para trasbordar
- 6º Idem para que se permita la descarga de bultos conducidos por cabotaje con destino á otro puerto
- 7º Torna guías
- 8º Manifiestos generales de carga que presentan los capitanes.

Reintegro de 12 céntimos de peso.

- 1º Declaraciones á consumo y tránsito
- 2º Idem á Depósito
- 3º Facturas de exportación
- 4º Idem de idem de géneros del Depósito
- 5º Idem de cabotaje
- 6º Licencias de alijo de oficio
- 7º Recibos talonarios de adeudo de géneros por declaración verbal
- 8º Hojas de adeudo.
- 1º Despacho de buques de cabotaje y los de exportación en lastre ó con carga que no exceda de 1,000 pesos, reintegro de 25 céntimos
- 2º Los de exportación con carga cuyo valor no exceda de 2,000 pesos y pase de 1000 reintegro de 1 peso 50 centavos y cuando exceda 2,000 psos reintegro de 8 pesos.

NOTA. — Los documentos que se han de presentar por duplicado y triplicado habrán de llevar el reintegro en todos sus ejemplares.

Es copia.—El Secretario, A. de Ojeda. [1143]

SECCIÓN DE ORDENACIÓN.

De orden del Excmo. Sr. Intendente, se pagarán en la próxima semana, las siguientes facturas de turno:

CUPON 24.

Diciembre 16.—Facturas números.....	1	y	2
Idem 17.—Facturas números.....	3	y	4
Idem 18.—Facturas números.....	5	y	6
Idem 19.—Facturas números.....	7	y	8
Idem 20.—Facturas números.....	9	y	10
Idem 21.—Atrasos: facturas importantes \$	1,000		

Y de su orden superior se hace público para conocimiento de los interesados.

Puerto-Rico, 13 de Diciembre de 1889.—El Intendente, Santos Aguilera.

Audiencia Territorial de Puerto-Rico.

SECRETARÍA DE GOBIERNO.

MINISTERIO DE ULTRAMAR. — DIRECCIÓN GENERAL DE GRACIA Y JUSTICIA. — *Negociado de los Registros Civil y de la Propiedad y del Notariado.* — Número 203. — Itmo. Sr.: — En el recurso gubernativo establecido por Don Pedro Cobreros y Cuevillas, contra la negativa del Registrador de la propiedad de esa Capital á inscribir una escritura de división de bienes y otra de venta por consecuencia de aquella pendiente en esta Dirección general á virtud de apelación del mencionado Registrador contra la decisión de esa Presidencia: — Resultando 1º que en 13 de Julio de 1888 ante el Notario Don Juan Ramon de Torres, Don Bernardino Fernandez Sanjurjo, protocolizó las diligencias de división de bienes que el Ldo. Don Hilario Cuevillas Hernandez practicara como contador partidario por consecuencia del fallecimiento de la esposa de aquél Doña Maria Teresa de Castro Lopez y Villalón; 2º que presentada la primera copia de esa escritura al Registrador de la propiedad para su inscripción se denegó la misma porque de los antecedentes del Registro resultaba que el condominio de la casa número 66 de la calle de la Fortaleza de la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico, que en virtud de aquella escritura se adjudicaba á Don Bernardino Sanjurjo y Vidal lo había adquirido este en constante matrimonio con Doña Maria Teresa de Castro Lopez y Villalón, sin que pudiera admitirse como válido el carácter de bienes dotales que se le atribuía por no acreditarse dicha circunstancia en forma legal y porque no se acompañaba el discernimiento del cargo de curador que se atribuía á Don Antonio Castro Lopez para representar á los menores hijos de la Doña Teresa de iguales apellidos; 3º que en el mismo día 13 de Julio hizo venta Don Bernardino Fernandez Sanjurjo de la mitad de la casa que le había sido adjudicada á favor de Don Pedro Cobreros y Cuevillas en cantidad de dos mil pesos y presentada dicha escritura, también, en el Registro de la propiedad, fué denegada su inscripción porque de

dicho documento resultaba que la mitad de la casa vendida la había adquirido el vendedor en constante matrimonio con Doña Maria Teresa de Castro Lopez y Villalón y la enagenaba ahora, siendo viudo, sin haberse podido verificar la inscripción á su favor en tal concepto, puesto que se había denegado en la misma fecha la de la adjudicación que de dicha partición de finca se le hacía en el testamento de su referida esposa; 4º que por consecuencia de esa doble negativa del Registrador, acudió Don Pedro Cobreros y Cuevillas al Juzgado de 1ª Instancia de Puerto-Rico en escrito de 31 de Enero último promoviendo recurso gubernativo y solicitando que se declarasen inscribibles ambos documentos, fundándose para ésto en que no podían considerarse como gananciales la mitad de la casa vendida por Don Bernardino Fernandez Sanjurjo á Don Pedro Cobreros Cuevillas despues del fallecimiento de Doña Maria Teresa de Castro Lopez, por que en vez de resultar ganancias en la sociedad conyugal había pérdidas puesto que el primero había aportado á su matrimonio 1.800 pesos; despues para reedificar la casa objeto de este contrato, había pedido á Don Antonio Jauregui mil pesos cuyas cantidades unidas á la de 200 pesos que se señaló en la divisoria para gastos de la testamentaria, formaban el total de 3.000 pesos que es el total de bajas generales, bajas que resultaban evidentes toda vez que la Doña Maria Teresa, no hizo aportación alguna al matrimonio, en que Don Bernardino Fernandez Sanjurjo y Don Antonio de Castro Lopez en los diversos caracteres que representaban en dicha testamentaria habían acudido al Juzgado solicitando la aprobación de las operaciones verificadas con motivo del fallecimiento de la esposa del primero; en que todos los interesados habían firmado el escrito pidiendo la sanción judicial de dichas operaciones de acuerdo con el artículo 1079 de la Ley de Enjuiciamiento civil; que las operaciones se habían ajustado á las reglas de los artículos 1076 y siguientes que estaban ajustadas á los preceptos de la Ley y que conforme á éstos se habían protocolizado en la Notaría correspondiente; 5º que oido el Registrador, sostuvo las notas de que se ha hecho mérito fundándose en que la mitad de la casa adjudicada á Don Bernardino Fernandez Sanjurjo en las operaciones testamentarias de su esposa aunque aparece inscrita á nombre de aquél fué adquirida durante su matrimonio con ésta y debe reputarse como bienes gananciales, como lo manda la Ley 4ª, título 4º libro X de la Novísima Recopilación, mientras no se pruebe que pertenece á uno de los conyuges; en que no se ha verificado la justificación de la aportación de Don Bernardino con la correspondiente escritura pública en que según se declara en el escrito de Don Pedro Cobreros ninguno de aquéllos conyuges aportó nada al matrimonio y que despues el padre del viudo le regaló 1.800 pesos con los que adquirió el condominio de la casa cuya venta motiva éste recurso; que esta manifestación en la escritura aun que sea acordada en concepto de parientes no tiene valor porque ya consta en el Registro el carácter de ganancial que tiene la mitad de la finca sin que por Cobreros se demuestre lo contrario; que la prueba única reconocida en derecho para acreditar las donaciones, es la escritura otorgada con las formalidades debidas; que esa escritura no existe por que de no ser así se hubiera hecho constar en el Registro para que en todo tiempo desapareciera el derecho que á esos bienes tenía la sociedad conyugal y que Cobreros suponía ejecutorio el auto en que se aprobó la división y partición de bienes debiendo el Registrador estar y pasar por él á los efectos de entenderse acreditar el carácter de donación *propter nuptias* que atribuía á los que eran gananciales de la sociedad conyugal y afirmando por último que dicho auto fué dictado en un asunto de jurisdicción voluntaria en donde no hubo contienda, que no tiene por tanto fuerza de sentencia ejecutoria, que son las únicas que el Registrador no puede calificar por considerarse ley y que la inscripción de aquella escritura de división de bienes es á todas luces improcedente; 6º que el Juez de 1ª Instancia de Puerto-Rico por auto de 1º de Abril último y vistos los artículos 27 de la Ley y 74 del Reglamento, 1076 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento civil; el Real Decreto de 6 de Noviembre de 1868 y la resolución de la Dirección general de los Registros del 9 de Enero de 1875, declaró inscribibles los documentos presentados al Registro y á que se refieren las dos negativas de inscripción de 5 de Enero anterior por considerar: 1º que el primer fundamento de la negativa del Registrador á inscribir la partición aprobada por auto de 3 de Junio de 1883 consistente en que se atribuye á la parte de casa adquirida por Don Bernardino Fernandez Sanjurjo el carácter de bienes dotales que no se acredita que tuviese, no es admisible porque ni en la cuenta y partición de referencia, ni en el auto que la aprobó, se da ese dictado al condominio de dicha finca antes al contrario se le señala un origen diferente del que como á dote pudiera corresponderle; 2º que aceptando que tal dictado de la nota de 5 de Enero último fuere, como fué sin duda producido por una equivocación material de copia y la negativa del Registrador y sus argumentos hicieran referencia al carácter de donación *propter nuptias* atribuido á esa partición dominical, según se deduce del texto mismo de la repetida nota y se expresa claramente en el escrito último de aquél funcionario tampoco parece procedente su resolución de no inscribir, por que conforme á la doctrina consignada por la Dirección general de los Registros, carecen los Registradores de toda atribución para calificarlos

fundamentos de las sentencias, autos y providencias dictadas por los Tribunales en negocios sometidos legalmente á su conocimiento y por consiguiente no les está permitido negar fuerza y valor al auto de aprobación de unas particiones, fundándose en que no se encuentra probado el determinado carácter atribuido á unos bienes por que al aprobar el Juez esas operaciones obró en asunto sometido indudablemente á su conocimiento y fué el único competente para declarar si se habían cumplido ó no por los interesados las prescripciones legales, sin que sea exacto como el Registrador afirma que esto se hiciera en un acto de jurisdicción voluntaria, sino en un procedimiento que no puede calificarse así, ni por su naturaleza ni por su tramitación ni por la voluntad expresa de la Ley que ha colocado los artículos porque se rige entre los que comprende el libro 2º de la Ley de Enjuiciamiento civil que trata de la jurisdicción contenciosa y no entre los del libro 3º que se ocupa de la voluntaria; 3º que, por otra parte, cuando los inventarios y partición de bienes de una herencia se hacen de perfecta conformidad de los interesados y representados los menores por sus padres ó por su curador *ad-litem* y no se formula contra ello ninguna reclamación en tiempo, todo lo cual ha ocurrido en la partición objeto de este incidente, es tal su fuerza y el valor que la Ley otorga á esta conformidad, que el Juez debe aprobarla según disposición expresa del artículo 1080 de dicha Ley de trámite y claro es que este mandato que obliga al Juzgado, con mas razón ha de obligar á los demás funcionarios judiciales y de todo orden por que de otra manera podrían dejar sin efecto actos y consentimientos á que los referidos artículos conceden un valor excepcional; 4º que en armonía con estos conceptos se dispuso por Real Decreto de 6 de Noviembre de 1868 que los Registradores de la propiedad no pudieran alegar ni suspender la inscripción de las expresadas particiones que se practicaren previa licencia judicial, ó fueran aprobadas judicialmente que es el caso que en el presente recurso se discute, y ni ese Real Decreto está derogado ni en él se establecen distinciones que autoricen la negativa del Registrador; 5º que el segundo fundamento de la nota denegatoria de 5 de Enero reducido á que no se acompañaba el discernimiento del cargo de curador *ad-litem* que se atribuía en la escritura á Don Antonio Castro Lopez, ha quedado subsanado con la presentación del documento que acredita aquella circunstancia; y 6º que la nota de igual fecha de 5 de Enero estampada por el Registrador al pé de la escritura de venta de la misma casa cuya mitad se adjudicó á Don Bernardino Fernandez Sanjurjo en la testamentaria repetida, nota denegatoria, que también ha sido objeto del presente recurso, se funda en la negativa de la misma fecha, á inscribir á nombre de Don Bernardino el condominio de la finca y en tal concepto está arreglado á la Ley, por que claro es, que mientras no se reconociera ese condominio en el vendedor no se podía aceptar la validez de la venta que celebraba; pero debe quedar subordinado á lo que en definitiva se resuelva sobre la repetida partición y declarada la validez de ésta, debe asimismo declararse inscribible la enajenación que ha llevado á efecto el condeño Don Bernardino Fernandez Sanjurjo. — 7º que interpuesta apelación del anterior auto por el Registrador, el Presidente de la Audiencia de Puerto-Rico, aceptando los fundamentos del auto apelado, declaró procedente la inscripción de los documentos objeto del recurso, confirmando aquél en todas sus partes. — Visto. — Aceptando los fundamentos de derecho de la resolución apelada ante la Dirección General ésta ha acordado confirmarla en todas sus partes. — Lo que con devoción del expediente original comunico á V. S. para su conocimiento, el del Registrador interesado y demás efectos. — Dios guarde á V. I. muchos años. — Madrid, 18 de Noviembre de 1889 — El Director General, Benito Pasarón. — Señor Presidente de la Audiencia de Puerto-Rico.

Lo que por disposición del Itmo. Sr. Presidente se publica en la GACETA OFICIAL en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 87 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

Puerto-Rico, Diciembre 9 de 1889. — El Secretario, de Gobierno, Miguel Monreal.

Por el Ministerio de Ultramar se ha dirigido al Itmo. Sr. Presidente con fecha 12 de Noviembre último, la Real orden que sigue:

“Itmo. Sr.: — Vista la comunicación del Presidente de la Audiencia de Puerto-Rico elevando copia certificada de una instancia de los Procuradores de aquella Capital en solicitud de que en lugar de los seis libros que deben llevar en cumplimiento del artículo 203 de las Ordenanzas de dicha Audiencia se les permita, sean únicamente los dos que el artículo 885 de la Ley orgánica del Poder judicial exige á los Procuradores de la Península; visto el dictamen y acuerdo del Fiscal y Sala de Gobierno de dicho Tribunal favorables á la petición; resultando que remitida la instancia á la Sección de Ultramar del Consejo de Estado ésta informó en 28 de Junio de 1887 que debía ampliarse la instrucción del expediente á fin de que pudiese dictarse una disposición general para todas las provincias de Ultramar; y pedido informe á las Audiencias de Cuba y Filipinas le elevaron á este Ministerio, que lo pasó á aquel alto Cuerpo; considerando que examinado el expediente por la Sección de Ha-